

Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Por sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-2996-2023, se resolvió acoger la demanda y declarar que el despido de que fue objeto el actor es injustificado; y condenar a la demandada al pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo, una indemnización por años de servicio recargada en un 80%, feriado legal y proporcional, más reajustes e intereses legales, con costas.

Contra este fallo, la parte demandada interpone recurso de nulidad invocando la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por estimar que es necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. En subsidio, invoca la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción manifiesta a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de las partes.

Considerando:

Primero: Que, la demandada invoca primero la causal contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, es necesario alterar la calificación jurídica de los hechos realizada por el tribunal, los que fueron asentados como constitutivos del incumplimiento que alegó el empleador.

En efecto, reclama que a pesar de que en el considerando octavo del fallo que impugna se reconoce que el trabajador calibró la maquina Drake sin seguir las instrucciones dadas, colocando un “*shift*” inhabilitando el sensor para poder revisar la caída de las vienasas en el proceso de envasado, lo que constituyen los hechos expuestos en la carta de despido, de todas maneras la sentenciadora concluye que no constituye un incumplimiento a las obligaciones del contrato de trabajo de tal gravedad que amerite el despido, sino tan solo una multa y una reeducación.

Estima que la manera en que la sentenciadora califica los hechos impide al empleador el ejercicio de las facultades de dirección que le son



propias, en un contexto en que los servicios ejecutados por el trabajador se lleven a cabo de manera diligente.

Agrega que, si un trabajador lleva a cabo sus funciones sin seguir u obedecer los procedimientos y normas establecidos en la empresa, de las que está en conocimiento, incumple sus obligaciones contractuales y genera las consecuencias propias de una conducta contraria a la diligencia laboral, y por la gravedad de la conducta, el término del contrato sin derecho a indemnización alguna.

También argumenta que, si la conducta del trabajador y el incumplimiento en que aquélla se traduce no pueden ser calificadas de grave, entonces se impide al empleador cumplir con el deber de higiene y seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, por cuanto cualquier empleado, a su arbitrio, ejecutaría labores sin cumplir con las normas y procedimientos imperantes en la empresa, permitiéndose adulterar las mismas, poniendo en riesgo la seguridad de sus compañeros.

Como ultima idea, señala que, si la sentenciadora estimó que existió un incumplimiento que al menos podía ser sancionado con amonestación o multa y reeducación, entonces sí existió motivo plausible para litigar de la demandada, por lo que debe ser absuelta de la condena en costas.

Afirma que lo denunciado influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo porque la corrección del vicio reclamado importa la modificación total de la parte resolutive del fallo, desde una sentencia que condena al empleador a una que declara que el despido es debido.

Solicita que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes y absuelva a la demandada del pago de las costas de juicio.

Segundo: Que, en subsidio, la demandada invoca la causal contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, la sentenciadora no analiza adecuadamente toda la prueba rendida y su congruencia con los hechos de la causa.

En primer lugar, estima que lo señalado en la demanda, en cuanto a que la prevencionista de riesgo habría tomado fotografías a la máquina usada por el trabajador y luego se habría retirado sin realizar observación alguna, sería desmentido por el documento denominado “Pauta de Intervención y Control Operacional de fecha 30 de marzo de 2023, con



firma del actor, observaciones del área: L5 sistemas intervenidos con botonera, operando sin protección”. Expresa que este documento daría cuenta que la prevencionista si observó la situación al trabajador, al punto que este firmó el documento en cuestión, aunque en juicio no lo haya reconocido. Alega que la sentenciadora únicamente indicó que no es relevante la circunstancia de que el trabajador no hubiere reconocido lo escrito en dicho documento, lo que se explica porque no fue escrito por él, pero no se pronuncia sobre la existencia del documento en sí, ni del hecho que esté firmado por el actor o que efectivamente si se le realizaron observaciones el 30 de marzo de 2023. Agrega que esta prueba fue respaldada por las declaraciones de los testigos de la demandada, y no fue objetada por la contraria, todo lo cual dejaría en evidencia una falta de análisis sobre tal prueba.

Por otra parte, reclama que en su declaración de absolución de posiciones el actor reconoció cual era su cargo, funciones, y los riesgos asociados a la misma, pero de todas maneras la sentenciadora no estimó que el incumplimiento cometido fuera grave. Plantea que así estamos frente a un trabajador que no contribuye a evitar accidentes de trabajo e incumple las obligaciones de su contrato, pero no puede recibir más sanción que una multa, lo que sería contrario a la lógica.

Agrega que la sentenciadora no explica por qué no se valoraron las declaraciones de los testigos de la demandada, que contestes con el actor, indicaron que para probar el funcionamiento de la máquina debía utilizarse una rejilla para evitar riesgos de lesiones y atrapamientos, lo que no fue respetado por el demandante.

También reclama que no fueron debidamente considerados el proyecto de finiquito y el comprobante de préstamos de bienestar, en cuanto si bien reconocen la existencia de deuda de la empresa al trabajador por concepto de feriados, también se debe compensar aquellos con los otorgados al actor, respecto de los cuales la demandante no rindió prueba sobre el pago u otra forma de extinción de la obligación. Señala que, si se hubiese considerado adecuadamente esta controversia, además, no se podría haber condenado en costas a la demandada.

Estima que se vulnera el principio lógico de la no contradicción, por cuanto si bien en la demanda se indicó que el actor no tuvo observación



alguna por su actuar, luego se incorporó como prueba el documento cuya existencia es negada recién en la audiencia de juicio, y de todas maneras se le resta valor probatorio.

También, estima infringido el principio de la razón suficiente, en cuanto alega que la sentenciadora señala que por el hecho de existir un apartado de sanciones o multas en el Reglamento Interno de la empresa, puede desvirtuar la prueba aportada al proceso y desestimar la gravedad de la actuación del actor.

Afirma que lo denunciado influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo porque si la sentenciadora hubiese examinado en su mérito toda la prueba rendida de la forma que se viene exponiendo, debió concluir que el actor sí incurrió en la causal de despido invocada, y disponer el rechazo de la demanda, o al menos reducir prudencialmente la cuantía de las condenas en consideración al prestamos de bienestar que no fue controvertido por el actor.

Solicita que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes y absuelva a la demandada del pago de las costas de juicio.

Posteriormente, en sus alegatos dejó subsistente la causal impetrada de manera subsidiaria sólo en lo relativo al rechazo de la excepción de compensación.

Tercero: Que el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como, asimismo, de las peticiones que efectúa. Igualmente, cabe tener presente que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y



establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste, el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El recurso de nulidad, finalmente requiere claridad y precisión en su fundamentación lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del Tribunal superior, el que no puede acogerlo por otros motivos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, en consecuencia, el recurso de nulidad es un arbitrio de carácter extraordinario y de derecho estricto y solo procede por las causales que expresamente se prevé en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo.

En cuanto al recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada fundado en lo principal en la causal prevista en el artículo 478 c) del Código del Trabajo:

Quinto: Que, sobre la causal alegada, esto es, la prevista en la letra c) del artículo 478, cabe tener en cuenta que la disposición citada consagra el motivo de invalidación *“cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”*.

Sexto: Que, por expresa precisión legal la causal esgrimida exige mantener inmutables *“las conclusiones fácticas del tribunal inferior”*, restricción que deben observar tanto el recurrente en sus planteamientos como el propio tribunal de nulidad a la hora de juzgar la procedencia de alterar la calificación jurídica asignada a los hechos que se tuvieron por probados. Por ende, la impugnación y la subsecuente revisión han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar conclusiones fácticas diversas de las fijadas y sin que pueda prescindirse tampoco de las que fueran determinadas en el fallo.

Séptimo: Que al respecto resulta ilustrador tener en consideración que en la sentencia recurrida se dieron por ciertos los siguientes



presupuestos fácticos, los que dada la naturaleza de la causal impetrada resultan para esta Corte inamovibles, los que se encuentran contenidos en la motivación séptima en la que se indica: *“Que, analizados las probanzas rendidas conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas reseñadas e los numerales anteriores, se concluye como acreditados los siguientes hechos:*

(1°) Que, el día fecha 30 de marzo del año en curso, a las 15:20 hrs. aproximadamente, el demandado se encontraba operando la máquina "Drake LS", llamándosele la atención por la prevencionista de riesgos, doña Carla Delgado, por cuanto habría deshabilitado el sensor de las máquinas deshabilitó para su calibración; sin que se hubiere producido un daño a la maquinaria o se hubiere afectado la integridad física del trabajador o sus compañeros de trabajos. Ello se acreditó mediante la declaración de los testigos que depusieron en estrados, unido al reconocimiento efectuado por el trabajador en su declaración de parte, y la prueba documental incorporada, no siendo relevante la circunstancia que el trabajador no hubiere reconocido lo escrito en dicho documento, lo que se explica porque no fue escrito por él.

(2°) Que, el trabajador no fue anteriormente amonestado por alguna otra infracción durante la vigencia de la relación laboral; sin que hubiere habido una investigación del Comité Paritario (lo que se probó en la medida que se pidió la exhibición de dicha investigación, señalándose que ésta no existía); tomándose la decisión de desvinculación por el Subgerente de Planta, (como él mismo testigo Sr. Pira reconoció), comunicada 6 días después, sin que se hubiera seguido con la graduación establecido interno en el Reglamento interno, que contemplaba como sanción (por la utilización descuidada de la maquinaria) con multa”.

Octavo: Que en cuanto a la desestimación de la causal impetrada por el empleador -gravedad del incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato- la sentenciadora razonó en la motivación octava: *“Que, conforme al reglamento interno, y sin perjuicio de la valoración que posteriormente podría realizar un Tribunal, la infracción advertida por la prevencionista de riesgo, en el modo en que el demandante procuraba calibrar la maquina DRAKE, únicamente podría haber autorizado, en uso*



de las facultades correctivas del empleador, la imposición de una multa; y de una (re) educación de la prevencionista de riesgo. En el mismo orden de ideas, la causal de término invocada, incumplimiento grave de las obligaciones de contrato, ha sido entendido como un despido disciplinario; la que es considerada como una de contenido abierto e indeterminado de infracciones convencionales graves, que se delimitan por estándares de aplicación y ponderación. (Álvaro Domínguez Montoya. Las causales del despido disciplinario en Chile. Pág. 88 y siguientes). Es decir, el incumplimiento debe ser de tal envergadura, que sobrepasa el estándar que haría procedente una mera amonestación verbal o escrita. Del hecho que se tuvo por establecido, el único incumplimiento en que incurrió el actor, que habría ameritado una amonestación o una multa, constituye la circunstancia de haber calibrado la máquina Drake no siguiendo las instrucciones dadas, colocando -según lo que sostuvo la prevencionista de riesgo- un “shift” inhabilitando el sensor para poder revisar la caída de las vienas en el proceso del envasado. Sin embargo, dicho incumplimiento en caso alguno justificaba que un trabajador -sin amonestaciones anteriores- y con 13 años de servicio fuere desvinculado, razón por la cual se declarará injustificada la causal invocada”.

Finalmente, en el considerando noveno se señala: “Que, no habiéndose acreditado que la decisión de despedir al trabajador sin derecho a indemnización responde a una decisión amparada por la Ley, basada en una causa razonablemente proporcional, corresponde declarar el despido injustificado, se accederá a lo pedido, en orden a que se ordenará el pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio y el recargo legal que en derecho corresponde, por haberse invocado como causal de término de la causal del N° 7 del artículo 160 del Código del Trabajo”.

Noveno: En consecuencia, es inútil por esta causal intentar cambiar o modificar las conclusiones fácticas -o los hechos establecidos- en el juicio, ya que éstos deben ser atacados por otras causales que contempla el citado Código Laboral. Por ende, en este contexto no puede argüirse un error de calificación jurídica con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, si el libelo plantea esa pretensión sobre la base de hechos diversos a los transcritos -o los que no se tuvieron por ciertos-, por cuanto el



recurrente reclama que la conducta del actor tiene la entidad de gravedad suficiente para aplicar la sanción para el despido contemplada en el N° 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, lo que consecuencialmente, traería aparejado la justificación del despido y, al haber decidido, el sentenciador, de la forma que lo hizo, al declarar injustificado el despido, se habría configurado el vicio que se denuncia.

En efecto, de acuerdo a las motivaciones antes transcritas la sentenciadora si bien logró establecer que efectivamente los hechos imputados por la demandada al demandante ocurrieron en la forma argüida por el recurrente, la situación no reviste los caracteres de gravedad necesarios para configurar la causal de despido invocada para poner término a los servicios del actor.

Décimo: Que, así establecido, debemos tener presente que el artículo 7 del Código del Trabajo señala que el contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Por su parte, en todo contrato de trabajo, además de la evidente relación de subordinación que lo configura, se encuentra marcado por un alto contenido valórico, de lo cual se desprende que existen ciertos principios éticos que ambas partes deber necesariamente respetar, tales como, el deber de fidelidad, lealtad, honradez, entre otros. De esta manera, los contratantes durante la vigencia de su vinculación, quedan sujetos a varios deberes que, si bien pueden no estar explicitados en el texto del contrato pertinente o consensuados expresamente, emanan de la naturaleza de la relación laboral, por ejemplo, que ninguna de las partes actuará en perjuicio o detrimento de la otra.

Undécimo: Que, como consecuencia de lo anterior, el legislador autoriza al empleador a poner término a la relación laboral cuando el trabajador ha incurrido en conductas que indiscutiblemente ultrajan la confianza que existe en la relación laboral y, precisamente, entonces, cabe analizar si las acciones desplegadas por la trabajadora señaladas en la carta de despido se encuadran, o no, en la causal de despido esgrimida



por la recurrente, es decir, la señalada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

Duodécimo: Además, el fallo justifica adecuadamente la insuficiencia de los hechos acreditados para configurar la causal que el recurrente defiende, desde que aquéllos no poseen la gravedad que exige la norma del N° 7 del artículo 160 del código del ramo.

De este modo, no existe yerro en la aplicación de la normativa ni en la calificación jurídica de la sentencia del grado. que la doctrina ha señalado que: *“Para que un hecho sea grave, resulta preciso que su relevancia y magnitud sean manifiestas, cuestión que permite desechar las simples infracciones aisladas, las imprudencias realizadas con justa causa de error, o las faltas mínimas, ya que ellas no están rodeadas de la gravedad suficiente para poder extinguir el contrato de trabajo. Sin perjuicio de ello, la gravedad puede emanar de un sólo hecho o bien de la reiteración de una serie de actos de menor entidad pero que, en su conjunto, revelan la gravedad exigida”*. (Irureta Uriarte, Pedro. (2013). La configuración jurídica de las vías de hecho como causa del despido).

Décimo tercero: Que, en este orden de ideas, de acuerdo a la correcta valoración que la sentenciadora efectuó de los medios de prueba rendidos por las partes, no estableció otro de los elementos consustanciales de la figura invocada, como es la gravedad o carácter irremediable, extremos estos últimos que resultan indispensables para la admisión del reproche que se efectúa, de acuerdo a la conceptualización que la doctrina y la jurisprudencia han realizado del motivo de despido objetivo alegado.

Décimo cuarto: Que, en este orden de ideas, se desestimaré la causal que al efecto fuere interpuesta por el demandado fundado en lo previsto en el artículo 478 c) del Código del Trabajo por cuanto la juzgadora estimó que no se probó la gravedad que requiere la aplicación del presupuesto fáctico contemplado en el artículo 160 N° 7 del signado cuerpo normativo.

Décimo quinto: Que el fundamento del recurso de nulidad impetrado por el recurrente dice relación además con la condena en costas, lo que claramente no puede constituir el fundamento del arbitrio,



por cuanto aquello no fue objeto de debate por los intervinientes, sino una consecuencia prevista en la ley, al dictar la decisión de lo debatido, situación no muta su naturaleza, esto es, no la priva de su carácter accesorio.

Décimo sexto: En este orden de ideas, se debe tener presente que, si bien en la materia se establecen algunas reglas especiales correspondientes al ámbito laboral, no se dispone de un estatuto autónomo a su respecto, sino que su regulación se encuentra bajo el amparo de las normas comunes a todo procedimiento contenidas en los artículos 138 y siguientes del Estatuto de Enjuiciamiento Civil y a la forma recursiva dispuesta en contra de esas resoluciones.

Décimo séptimo: Que, de esta forma, acontece que el recurso de nulidad no es la vía idónea para impugnar lo decidido en materia de costas, por cuanto si bien se expresa en la sentencia definitiva, no reviste dicho carácter.

A este respecto, se debe recordar que la inclusión de las costas en la sentencia definitiva responde a un imperativo legal, pero no está contenido en el acto jurídico procesal de la sentencia definitiva, por cuanto no dice relación con la determinación de los hechos, valoración de la prueba y la decisión del fondo del litigio, por lo que no se puede decir que está vinculada a la resolución del asunto controvertido.

En razón de lo expresado, entonces, y considerando que el recurso de nulidad es un medio de impugnación extraordinario y de derecho estricto, destinado a reclamar de la decisión del conflicto jurídico, y no de cuestiones que no corresponden a tal carácter, es que no resulta procedente la revisión de lo propuesto por esta vía.

Décimo octavo: Que, en base a todo lo señalado precedentemente, es posible advertir que el recurso no puede prosperar, debiendo, en consecuencia, ser rechazado.

En cuanto al recurso de nulidad interpuesto por el demandado fundado de manera subsidiaria en lo previsto en el artículo 478 b) del Código del Trabajo:

Décimo noveno: Que, sobre la causa invocada por la parte denunciante, cabe tener en cuenta que el artículo 456 del Código del



Trabajo establece que: *“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.*

Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”

Por ello, lo que corresponde es determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta, esto es, de manera evidente y notoria las reglas indicadas en el artículo 456 ya citado.

Vigésimo: Que, de acuerdo a lo expresado, nuestro sistema procesal ha entregado parámetros a los jueces del fondo para la valoración de la prueba rendida en la materia, imponiéndoles la obligación de respetar la coherencia y la razonabilidad que debe conducir tal proceso para resolver en un determinado sentido, los que Couture define como *“las reglas del correcto entendimiento humano”*.

En consecuencia, en el examen de fundamentación de las sentencias se exige que los tribunales asienten los hechos que sostienen lo decidido y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, porque su motivación legitima la función jurisdiccional y da cabida a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto, de manera que la función del tribunal *ad quem* al conocer del recurso de nulidad por esta causal, radica en la revisión del razonamiento que ha seguido el tribunal en el citado proceso.

Vigésimo primero: Que, para que esta Corte, en cuanto tribunal de nulidad, se encuentre en condiciones de efectuar un control sobre las reglas de la valoración de la prueba en la fundamentación de la sentencia, resulta indispensable que la parte recurrente precise al momento de formalizarlo, las reglas fundamentales de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que habrían sido incumplidas por el juez de la instancia, límites de ponderación que tradicionalmente se han entendido referidos a las leyes fundamentales de coherencia y derivación y a los



principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Vigésimo segundo: Que, en este orden de ideas, el recurrente cuestiona los razonamientos efectuados por la sentenciadora para establecer los hechos de la causa en torno a la no valoración íntegra de la prueba rendida en juicio, correspondiente a la “Pauta de Intervención y Control Operacional” de fecha 30 de marzo de 2023, los testigos de la demandada, el proyecto de finiquito y el comprobante de préstamos de bienestar, presupuesto que claramente se condice con la interposición de una causal diversa a la deducida por el demandado, motivo suficiente para desestimar el presente arbitrio fundado en la prevista en el artículo 478 b) del Código del Trabajo aunado a que el fundamento de su alegación dice relación con la eventual desestimación de la excepción de compensación, la que no fue impetrada en su oportunidad por el demandado y en consecuencia, no se contiene como decisión en la sentencia que se revisa.

Vigésimo tercero: Que, no obstante lo anterior para analizar el recurso es necesario tener en cuenta que la impugnación por esta causal dice relación con el entendimiento de la existencia de un vicio producido en el razonamiento probatorio del tribunal, el que se habría verificado por la infracción -en dicho proceso mental para fundar su convicción- de las reglas de la lógica al desestimar la excepción de compensación, la que como se ha señalado no fue impetrada por el recurrente y no se contienen en consecuencia en la decisión que se revisa.

Vigésimo cuarto: Que a mayor abundamiento es dable señalar que en este caso, el proceso mental de la jueza para arribar a la convicción contenida en la sentencia recurrida se afina en la valoración que se efectúa de la prueba.

Vigésimo quinto: Que lo antes expresado impone considerar que los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada para resolver la acción, independientemente si fueran compartidos o no por el recurrente, constituyen reflexiones idóneas que permite entender dentro de la lógica, la convicción de la jueza cuyas conclusiones no desbordan los márgenes entregados por la ley y especialmente las de la lógica y no contradicción. La decisión demuestra razón suficiente que no contiene imperfecciones,



atribuyendo a los hechos que el recurso propone una incidencia en el núcleo de la acción propuesta, que aparece provista de sustento y motivación que difiere de la asignada por el recurso, por lo que no es posible generar una nueva prueba para desvirtuar la convicción a la que arribó el sentenciador que estuvo presente en la discusión, rendición y observaciones de las acreditaciones que efectuaron los intervinientes para demostrar sus respectivas teorías del caso.

Vigésimo sexto: Que, por lo demás, para el análisis de esta causal dado que se trata de un vicio formal exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea “manifiesta”, esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que obviamente no se extiende al caso en que la ponderación de los medios de prueba no corresponda a la apreciación particular que el interesado hace de los mismos. En el presente caso, el fallo recurrido contiene en términos generales la relación y análisis de los medios de prueba aportados al juicio, sin que se aprecie por esta Corte en el razonamiento del sentenciador alguna vulneración a las reglas de valoración de la prueba, ninguna infracción “manifiesta” de alguna regla de la sana crítica, ni de algún principio de la lógica, ni de las máximas de la experiencia, expresándose claramente en el mismo las razones en atención a las cuales el juez del grado concluye del modo que es reprochado por la parte demandada mediante el presente recurso, aunado a que además no tuvo influencia en lo dispositivo del fallo -artículo 478 inciso penúltimo del Código del Trabajo-, por lo que este será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477, 478 letras b) y c), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechaza, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-2996-2023, la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Verónica Sabaj Escudero.

N° Laboral-Cobranza-3495-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHRXPRDXTS



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXRXPDXTS

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogado Integrante Waldo Leonidas Parra P. Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a tres de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXRXPDXTS